

073/2025**I**

La consulta plantea una serie de cuestiones acerca de las competencias de la Subdirección General de Formación y Ordenación Profesional, en relación con la posibilidad por parte del Registro Estatal de Profesionales Sanitarios de realizar consulta de los antecedentes penales/sexuales de los profesionales sanitarios en los registros establecidos a tal fin sin contar con su consentimiento expreso.

Para ello la consulta cita y argumenta en relación con distintas normas que regulan o afectan al Registro Estatal de Profesionales Sanitarios (REPS), comenzando por la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias; el Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, por el que se regula el Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia (SIRAJ); el Real Decreto 640/2014, de 25 de julio, por el que se regula el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios; el Real Decreto 1110/2015, de 11 de diciembre, por el que se regula el Registro Central de Delincuentes Sexuales; la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia; y por último el Real Decreto 581/2017, de 9 de junio, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, relativo al mecanismo de alerta en el caso de las profesiones sanitarias para con los demás estados miembros de la Unión Europea. Cita también el Reglamento (UE) 2016/679 (Reglamento general de protección de datos, RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD).

A su vez, la consulta realiza una serie de manifestaciones sobre la situación o la realidad de la implementación de lo que se encuentra regulado en dichas normas. Así, por ejemplo, en relación con la obligación de comunicar los datos de condenas a inhabilitación que dimana del art. 6 del Real Decreto 640/2014, de 25 de julio, por el que se regula el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios, afirma que *“la Subdirección General de Formación y Ordenación Profesional informa, por su experiencia, de que esta obligación por parte de los Juzgados y Tribunales no siempre se cumple. Además, el Sistema de Registros Administrativos de Apoyo a la Administración de Justicia, comunica a REPS periódicamente las sentencias firmes de inhabilitación o suspensión para el ejercicio de profesión sanitaria, pero sólo en los casos en*

los que se cita específicamente la profesión en la sentencia, hecho que no siempre se produce”.

Asimismo, y por su relación con la consulta el DPD manifiesta en ella que: *“el problema se deriva de la imposibilidad técnica de formular una consulta a la Plataforma del Ministerio de Justicia sólo sobre antecedentes en los que exista inhabilitación o suspensión, ya que la plataforma consulta sobre la totalidad de los antecedentes penales del DNI del consultado, sin permitir usar en la consulta criterios que permitan acotar los resultados sólo a las condenas por inhabilitación o suspensión; en consecuencia, la respuesta a la consulta se refiere a la totalidad de los antecedentes penales (con lo que, por ejemplo, aún sin pretenderlo, se obtendría la información de la existencia de una condena por alcoholemia)”.*

Tras argumentación que antecede, la consulta afirma: *Parece pues, a tenor de lo expuesto, que no es posible el acceso, sin consentimiento del interesado, por parte del Ministerio de Sanidad a las plataformas de antecedentes penales o sexuales, ya que no se contempla en la normativa y, por otro lado, no existe actualmente una Plataforma de antecedentes que permita la consulta exclusivamente sobre antecedentes en los que exista inhabilitación o suspensión, que es aquello para lo que tiene habilitación legal el Ministerio de Sanidad sin necesidad del referido consentimiento.*

Una vez expuesto lo anterior, la consulta formula las siguientes cuestiones:

- 1. Teniendo en cuenta la normativa en vigor, dado que la consulta se realiza sobre la totalidad de los antecedentes penales ¿puede el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios, realizar la consulta acerca de la existencia o no de antecedentes penales de dichos profesionales a los efectos de conocer si están inhabilitados o suspendidos para el ejercicio profesional por sentencia judicial firme, sin contar con el consentimiento del interesado?*
- 2. Teniendo en cuenta la normativa en vigor, ¿puede el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios realizar la consulta acerca de la existencia o no de antecedentes sexuales de dichos profesionales a los efectos de conocer si existe alguna limitación para trabajar con menores sin contar con el consentimiento del interesado?*
- 3. En caso negativo, ¿podría considerarse que un cambio legislativo, dictando una norma con rango de ley, que permita la consulta de antecedentes penales y/o sexuales de los profesionales sanitarios sin contar con su consentimiento a los efectos de comprobar que el acceso y el ejercicio profesional cumple con las resoluciones judiciales y*

también con la carencia de antecedentes sexuales, sin que ello contradiga la LOPDGDD y el RGPD?

4. ¿Podría el Ministerio de Sanidad delegar la consulta en SIRAJ acerca de la existencia o no de antecedentes penales de dichos profesionales a los efectos de conocer si están inhabilitados o suspendidos para el ejercicio profesional por sentencia judicial firme, sin contar con el consentimiento del interesado, en otro departamento y órgano de la Administración General del Estado, y en tal caso en cuál y mediante qué instrumento jurídico?

II

El REPS fue creado por el art. 9 del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, que introduce la Disposición Adicional décima en la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.

Disposición adicional décima. Registro Estatal de Profesionales Sanitarios.

1. Con la finalidad de facilitar la adecuada planificación de las necesidades de profesionales sanitarios del Estado y de coordinar las políticas de recursos humanos en el ámbito del Sistema Nacional de Salud, se crea en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios que se integrará en el Sistema de Información Sanitaria del Sistema Nacional de Salud.

2. Dicho Registro, que se implementará en soporte digital, se nutrirá de los registros oficiales, de profesionales obrantes en las administraciones estatal y autonómicas, en los colegios profesionales, consejos autonómicos y consejos generales de los mismos, en los centros sanitarios privados y en las entidades de seguros que operen en el ramo de la enfermedad, que estarán obligados a facilitar los datos que se consideren necesarios, con sujeción a los criterios que determine el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en los términos previstos en el artículo 53.3 de esta ley.

3. El Registro Estatal de Profesionales Sanitarios será público en lo que se refiere al nombre, titulación, especialidad, lugar de ejercicio, categoría y función del profesional, así como en lo referente a la titulación, especialidad, Diploma de Área de Capacitación Específica y de Acreditación y Acreditación Avanzada, si los hubiere, y a las fechas de obtención y revalidación de cada uno de ellos.

4. Será de aplicación al Registro Estatal de Profesionales Sanitarios lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Corresponde al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad la adopción de las medidas de seguridad técnicas y organizativas previstas en la mencionada normativa, velando en particular porque no quepa el acceso indiscriminado a los datos que no tengan carácter público conforme a lo dispuesto en el apartado anterior.

Asimismo, corresponde al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad implementar de forma progresiva el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios a las distintas profesiones sanitarias y la actualización permanente de los datos que el mismo contenga, en particular, siempre que se produzca una incidencia derivada del ejercicio profesional.

Dicho REPS se configura por tanto como un instrumento de recursos humanos para facilitar la adecuada planificación de las necesidades de profesionales sanitarios en España, y no tanto, o al menos no en principio, como un instrumento de ejecución (sí de inscripción o registro, como veremos a continuación) de sentencias penales o resoluciones administrativas relativas a la inhabilidad para el ejercicio de las profesiones sanitarias de quienes hayan sido condenados o sancionados por determinados delitos.

La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, en su art. 4.8 (introducido por Ley 3/2014, de 27 de marzo) establece determinadas condiciones o requisitos (no exhaustivos) para el ejercicio de una profesión sanitaria:

a) Estar colegiado, cuando una ley estatal establezca esta obligación para el ejercicio de una profesión titulada o algunas actividades propias de ésta.

*b) No encontrarse **inhabilitado o suspendido** para el ejercicio profesional por **sentencia judicial firme**, durante el periodo de tiempo que fije ésta.*

c) No encontrarse suspendido o inhabilitado para el ejercicio profesional por resolución sancionadora impuesta por un colegio profesional sanitario, cuando una ley estatal establezca para este ejercicio la obligación de estar colegiado, durante el periodo de tiempo que fije ésta.

d) No encontrarse suspendido o inhabilitado para el ejercicio profesional, o separado del servicio, por resolución administrativa sancionadora

firme, durante el periodo de tiempo que fije ésta, cuando se ejerza la profesión en el ámbito de la asistencia sanitaria pública.

e) Tener suscrito y vigente un seguro de responsabilidad, un aval u otra garantía financiera, sean de protección personal o colectiva, que cubra las indemnizaciones que se puedan derivar de la responsabilidad profesional por un eventual daño a las personas causado con ocasión de la prestación de tal asistencia o servicios cuando se ejerza la profesión en el ámbito de la asistencia sanitaria privada.

El apartado 9 de dicho art. 4 de la Ley 44/2003 establece mecanismos para tratar de asegurar que, si dichas condiciones o requisitos se alterasen en el tiempo, queden *registradas* en el REPS para actuar en consecuencia.

*9. Con la finalidad de facilitar la observancia de los requisitos previstos en el apartado anterior, se establecen las siguientes **obligaciones de cesión de datos**, para las que no será necesario el consentimiento del titular de los datos de carácter personal:*

*a) Los **juzgados y tribunales** deberán remitir aquellos datos necesarios referentes a las **sentencias firmes de inhabilitación o suspensión** para el ejercicio profesional al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en la forma que reglamentariamente se establezca.*

*b) Las **administraciones públicas** con competencias sancionadoras sobre los profesionales sanitarios empleados por ellas deberán remitir las resoluciones sancionadoras que afecten a la situación de suspensión o habilitación de éstos.*

*c) Las **corporaciones colegiales** deberán remitir al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad copia de las resoluciones sancionadoras que suspendan o inhabiliten para el ejercicio profesional impuestas por ellos, cuando una ley estatal establezca para este ejercicio la obligación de estar colegiado.*

d) El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad comunicará a las entidades mencionadas en los apartados b) y c) anteriores las resoluciones sancionadoras que reciba. Para ello, establecerá mecanismos de cooperación y sistemas de comunicación e intercambio de la información a través del Registro Estatal de Profesionales Sanitarios, creado por la disposición adicional décima de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.

Parece resultar pues de este sistema legal que son las entidades que ejercen potestades penales o sancionadoras que afectan al ejercicio de las profesiones sanitarias quienes han de comunicar al REPS, principalmente, las

sentencias y resoluciones sancionadoras que puedan afectar a los requisitos establecidos en la ley para el ejercicio de dichas profesiones sanitarias (y este a aquellos, en los casos en que este reciba dichas resoluciones).

A su vez, el art. 4.10 de la citada ley 44/2003 establece determinados tratamientos dirigidos a contrastar la veracidad de los datos que constan en el REPS, para los cuales no se necesita el consentimiento del titular de los datos en cuestión, a los fines de verificar los datos de identificación de la persona (a través de la consulta a los archivos y ficheros del DNI y NIE competencia del Ministerio del Interior), y para las sentencias penales de inhabilitación o suspensión para el ejercicio profesional contenidas en los registros del SIRAJ en el Ministerio de Justicia (hoy día Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes).

*10. El órgano encargado del Registro Estatal de Profesionales Sanitarios podrá consultar los **datos de carácter personal de los profesionales sanitarios** contenidos en los archivos y ficheros del Documento Nacional de Identidad (DNI) y del Número de Identidad del Extranjero (NIE) competencia del Ministerio del Interior, para contrastar la veracidad de la información que consta en el registro. **Para esta consulta no será necesario el consentimiento del titular de los datos de carácter personal.***

*El órgano encargado de los registros integrados en el Sistema de Registros Administrativos de Apoyo a la Administración de Justicia, informará al órgano del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad encargado del Registro Estatal de Profesionales Sanitarios, a **solicitud de éste, de los datos necesarios referentes a las sentencias de inhabilitación o suspensión** para el ejercicio profesional contenidas en las inscripciones de estos registros integrados, siempre que no se trate de información reservada a Jueces y Tribunales, en la forma que reglamentariamente se establezca. **Para la cesión de estos datos no será necesario el consentimiento del titular de los datos de carácter personal.***

Ahora bien, hasta ahora nos encontramos ante sentencias que *inhabilitan o suspenden* para la práctica profesional, lo que ciertamente requiere un pronunciamiento judicial *expreso y específico* en dicho sentido, conforme al art. 45 y concordantes del Código Penal.

Artículo 45.

*La **inhabilitación especial para profesión, oficio, industria o comercio u otras actividades, sean o no retribuidas, o cualquier otro derecho, que ha de concretarse expresa y motivadamente en la sentencia, priva a la persona penada de la facultad de ejercerlos durante el tiempo de la***

*condena. La autoridad judicial **podrá restringir la inhabilitación** a determinadas actividades o funciones de la profesión u oficio, retribuido o no, permitiendo, si ello fuera posible, el ejercicio de aquellas funciones no directamente relacionadas con el delito cometido.*

Se trata en definitiva de una pena que requiere de concreción judicial, motivada, aplicada al caso concreto. En caso de que no se establezca la profesión a la que se aplica la pena, conforme al principio de legalidad de la pena, en su dimensión relativa a la garantía penal (*nulla pena sine lege*), no será posible entender impuesta dicha pena, ni las consecuencias que ello conllevaría, a lo que hay que añadir que en materia de limitación o privación de derechos, la interpretación no puede sino ser restrictiva (véase en una aplicación en un caso como el mencionado STS, Secc. 4ª, nº 378/2019, de 20 marzo 2019, FJ 5º).

III

La Decisión marco 2004/68/JAI del Consejo, de 22 de diciembre de 2003, relativa a la lucha contra la explotación sexual de los niños y la pornografía infantil estableció en su art. 5.3 que:

*3. Cada Estado miembro adoptará las medidas necesarias para garantizar que una persona física, que haya sido condenada por alguna de las infracciones mencionadas en los artículos 2, 3 y 4 pueda, en su caso, ser **inhabilitada**, con carácter temporal o permanente, para el **ejercicio de actividades profesionales que supongan el cuidado de niños**.*

Esta Decisión fue incorporada al Derecho español de forma esencial mediante la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, que reformó el Código Penal (tipos de explotación sexual de menores y pornografía infantil), y quedó posteriormente integrada y completada con la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, que volvió a reformar dichos preceptos del Código Penal para adaptarlos a la Directiva 2011/93/UE que sustituyó a la Decisión marco.

La citada Directiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil, sustituye la Decisión marco 2004/68/JAI del Consejo, y establece:

Artículo 10 Inhabilitación derivada de sentencias condenatorias

1. A fin de evitar el riesgo de reincidencia en los delitos, los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que una

persona física que haya sido **condenada por una infracción contemplada en los artículos 3 a 7** pueda ser **inhabilitada**, con carácter temporal o permanente, para el ejercicio de actividades, al menos profesionales, que impliquen **contactos directos y regulares con menores**.

2. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que **los empresarios**, al contratar a una persona para realizar actividades profesionales o actividades de voluntariado organizadas que impliquen contactos directos y regulares con menores, tengan **derecho a solicitar información, de conformidad con el Derecho nacional**, por cualquier medio apropiado, como el **acceso previa petición o a través del interesado**, de la existencia de condenas por infracciones contempladas en los artículos 3 a 7 que consten en el registro de antecedentes penales, o de cualquier inhabilitación para ejercer actividades que impliquen contactos directos y regulares con menores derivada de dichas condenas penales.

3. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que, con vistas a la aplicación de lo dispuesto en los apartados 1 y 2, **la información relativa a la existencia de condenas penales** por cualquiera de las infracciones contempladas en los artículos **3 a 7**, o de cualquier inhabilitación para ejercer actividades que impliquen contactos directos y regulares con menores derivada de dichas condenas penales, **sea transmitida** con arreglo a los procedimientos establecidos en la Decisión marco 2009/315/JAI del Consejo, de 26 de febrero de 2009, relativa a la organización y al contenido del intercambio de información de los registros de antecedentes penales entre los Estados miembros, **cuando se solicite la información de conformidad con el artículo 6 de dicha Decisión marco con el consentimiento de la persona interesada**.

Es de tener en cuenta, específicamente, que esta Directiva, en sus Considerandos 40 a 42 dicen así:

(40) Cuando la peligrosidad o los posibles riesgos de reincidencia en las infracciones así lo aconsejen, los delincuentes condenados deben ser inhabilitados, con carácter temporal o permanente, **en caso necesario**, para el ejercicio, al menos con carácter profesional, de actividades que impliquen contactos directos y regulares con menores. **Los empresarios tienen derecho a ser informados**, cuando contraten personal para un puesto que implique tales contactos directos y regulares con menores, de las condenas por infracciones sexuales contra menores que consten en los antecedentes penales, o de las inhabilitaciones vigentes. A efectos de la presente Directiva, la noción de empresario también debe abarcar a las personas que estén al frente de

*una organización dedicada a labores de voluntariado que guarden relación con la vigilancia o el cuidado de menores y que impliquen contactos directos y regulares con ellos. **El modo de facilitar esa información, por ejemplo, por medio de la persona en cuestión, así como su contenido exacto, el sentido de las actividades de voluntariado organizadas y los contactos directos y regulares con los menores deben establecerse conforme a la legislación nacional.***

*(41) Atendiendo a las distintas tradiciones jurídicas de los Estados miembros, la presente Directiva tiene en cuenta el hecho de que **el acceso a los registros de antecedentes penales únicamente puede ser autorizado por las autoridades competentes o la persona interesada. La presente Directiva no establece obligación alguna de modificar los regímenes nacionales** aplicables a los registros de antecedentes penales o a las vías de acceso a su contenido.*

*(42) La presente Directiva **no tiene por objeto la armonización de las normas relativas al consentimiento de la persona interesada para el intercambio de informaciones procedentes de los registros de antecedentes penales, es decir, determinar si se precisa dicho consentimiento o no.** Independientemente de que se precise o no dicho consentimiento con arreglo al Derecho nacional, la presente Directiva no establece ninguna obligación nueva de modificación del Derecho nacional y los procedimientos nacionales a este respecto.*

Este artículo 10 de esta Directiva 2011/93/UE fue traspuesto al derecho español por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, que introdujo un art. 13.5 en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, con la siguiente redacción:

*5. Será requisito para el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores, el no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos. A tal efecto, **quien pretenda el acceso** a tales profesiones, oficios o actividades **deberá acreditar esta circunstancia** mediante la aportación de una **certificación negativa** del Registro Central de delincuentes sexuales*

Este art. 13.5 ha sido suprimido por la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, y sustituida su regulación por los arts. 57 a 60 de esta última (que no tienen carácter de ley orgánica, ver disposición final decimonovena), que regula la

necesidad de obtener una “*certificación negativa*” del Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos para el acceso a profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con personas menores de edad.

Artículo 57. Requisito para el acceso a profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con personas menores de edad.

1. Será **requisito para el acceso y ejercicio** de cualesquiera profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con personas menores de edad, el no haber sido condenado por sentencia firme por cualquier delito contra la libertad e indemnidad sexuales tipificados en el título VIII de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, así como por cualquier delito de trata de seres humanos tipificado en el título VII bis del Código Penal. A tal efecto, **quien pretenda** el acceso a tales profesiones, oficios o actividades deberá **acreditar** esta circunstancia mediante la aportación de una **certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales**

2. A los efectos de esta ley, son profesiones, oficios y actividades que implican contacto habitual con personas menores de edad, todas aquellas, retribuidas o no, que por su propia naturaleza y esencia conllevan el **trato repetido, directo y regular y no meramente ocasional** con niños, niñas o adolescentes, así como, en todo caso, todas aquellas que tengan como destinatarios principales a personas menores de edad.

3. Queda prohibido que las empresas y entidades den ocupación en cualesquiera profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con personas menores de edad a quienes tengan antecedentes en el Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos.

Artículo 58. Consecuencias de la existencia de antecedentes en caso de personas trabajadoras o aquellas que realicen una práctica no laboral que conlleve el alta en la Seguridad Social.

1. La existencia de antecedentes en el Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos al inicio de la actividad en aquellos trabajos o actividades que impliquen contacto habitual con personas menores conllevará la imposibilidad legal de contratación.

2. La existencia sobrevenida de antecedentes en el Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos conllevará el cese

inmediato de la relación laboral por cuenta ajena o de las prácticas no laborales. No obstante, siempre que fuera posible, en atención a las circunstancias concurrentes en el centro de trabajo y a la actividad desarrollada en el mismo, la empresa podrá efectuar un cambio de puesto de trabajo siempre que la nueva ocupación impida el contacto habitual con personas menores de edad.

*De conformidad con lo anterior, **el trabajador por cuenta ajena deberá comunicar** a su empleador cualquier cambio que se produzca en dicho Registro respecto de la existencia de antecedentes, aun cuando estos se deriven de hechos anteriores al inicio de su relación laboral. La omisión de esta comunicación será considerada como incumplimiento grave y culpable a los efectos de lo dispuesto en el artículo 54.2.d) del Estatuto de los Trabajadores.*

Esta obligación de comunicación, así como las consecuencias de su incumplimiento, deberán incluirse también en los acuerdos que se suscriban entre las empresas y los beneficiarios de las prácticas no laborales que se formalicen al amparo del Real Decreto 1543/2011, de 31 de diciembre, por el que se regulan las prácticas no laborales en empresas.

Artículo 59. Consecuencias del incumplimiento del requisito en caso de personas que realicen actividades en régimen de voluntariado.

1. La existencia de antecedentes en el Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos al inicio de la actividad en aquellas actividades de voluntariado que impliquen el contacto habitual con personas menores de edad obliga a la entidad de voluntariado a prescindir de forma inmediata del voluntario o voluntaria. A tal efecto, quien pretenda el acceso a tales actividades deberá acreditar esta circunstancia mediante la aportación de una certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales.

2. La existencia sobrevenida de antecedentes en el Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos conllevará el fin inmediato de la participación de la persona voluntaria en las actividades que impliquen el contacto habitual con personas menores. No obstante, siempre que fuera posible, en atención a las circunstancias concurrentes en la entidad y a la actividad desarrollada en el mismo, la entidad podrá efectuar un cambio de actividad de voluntariado siempre que la misma no suponga el contacto habitual con personas menores de edad.

3. Las comunidades autónomas establecerán mediante norma con rango de ley el régimen sancionador correspondiente al incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 57.1.

Artículo 60. Cancelación de antecedentes en el Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos.

1. Los antecedentes que figuren como cancelados en el Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos no se tomarán en consideración a los efectos de limitar el acceso y ejercicio de profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores de edad.

2. Instada por la persona interesada la cancelación de antecedentes en el Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos, y transcurrido el plazo máximo de tres meses sin que por la Administración se haya dictado resolución, la petición se entenderá desestimada por silencio administrativo, sin que sea de aplicación a estos supuestos lo establecido en el artículo 3 del Real Decreto 1879/1994, de 16 de septiembre, por el que se aprueban determinadas normas procedimentales en materia de justicia e interior.

Dado que la Directiva 2011/93/UE no contiene, como hemos visto, una pretensión armonizadora acerca de las normas relativas al consentimiento de la persona interesada para el intercambio de informaciones procedentes de los registros de antecedentes penales, es decir, determinar si se precisa dicho consentimiento o no, (el art. 10.2 de la directiva permite el acceso del empresario *previa petición o a través del interesado*, configurándolos como dos sistemas alternativos posibles) habrá que estar al derecho nacional acerca de la necesidad de ese consentimiento, sobre la base del art. 10.2 de la Directiva. Así, hasta el momento, el texto del art. 57.1 de la Ley Orgánica 8/2021 requiere que el interesado *aporte certificación negativa* del Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos (RCDS), si bien, como apunta la solicitud de consulta, la Disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 8/2021 establece que en el plazo de un año el gobierno establecerá mecanismos para la comprobación automatizada de los antecedentes regulados en los artículos 57 a 60, y que a este fin, añade la consulta, el Real Decreto 407/2024, de 23 de abril, que modifica el Real Decreto 1110/2015, de 11 de diciembre, por el que se regula el Registro Central de Delincuentes Sexuales establece esos mecanismos (ver pág. 10, segundo párrafo, de la solicitud de consulta).

IV

No parece existir discusión acerca el carácter de dato personal de los datos cuyo examen aborda la consulta (“antecedentes penales/sexuales de los profesionales sanitarios sin contar con su consentimiento expreso”). Como tales “antecedentes penales/sexuales” nos encontraríamos ante *datos personales relativos a condenas e infracciones penales*, regulados en el art. 10 RGPD y en el art. 10 LOPDGDD como *datos de naturaleza penal*.

A este respecto, el apartado 1 del art. 10 LOPDGDD señala que *[e]l tratamiento de datos personales relativos a condenas e infracciones penales, así como a procedimientos y medidas cautelares y de seguridad conexas, para fines distintos de los de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, solo podrá llevarse a cabo cuando se encuentre amparado en una norma de Derecho de la Unión, en esta ley orgánica o en otras normas de rango legal*.

Se requiere por tanto de una norma con rango de ley para su tratamiento.

Por otra parte, y citando doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) (véase sentencia de 7 de marzo de 2024, en el asunto C-740/22, Endemol Shine Finland Oy, apartados 45 y siguientes), el TJUE ha recordado, respecto de la naturaleza especialmente sensible de los datos de naturaleza penal, que:

54 *En cuanto a la gravedad de la injerencia en estos derechos, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que el tratamiento de los datos relativos a condenas e infracciones penales o medidas de seguridad conexas puede constituir, en atención a la particular sensibilidad de dichos datos, una injerencia especialmente grave en los derechos fundamentales al respeto de la vida privada y a la protección de los datos personales, garantizados por los artículos 7 y 8 de la Carta. En efecto, dado que tales datos se refieren a comportamientos que conllevan la desaprobación de la sociedad, la concesión de acceso a dichos datos puede estigmatizar a la persona afectada y constituir así una injerencia grave en su vida privada o profesional [véase, en ese sentido, la sentencia de 22 de junio de 2021, Latvijas Republikas Saeima (Puntos por infracciones de tráfico), C-439/19, EU:C:2021:504, apartados 74, 75 y 112].*

Es conveniente recordar, asimismo, y resulta de la sentencia citada, conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, que

45 *[...] todo tratamiento de datos personales, por una parte, debe ser conforme con los principios relativos al tratamiento de datos establecidos en el artículo 5 del RGPD, y, por otra, atendiendo*

concretamente al principio de licitud previsto en el apartado 1, letra a), de dicho artículo, debe cumplir con alguno de los requisitos de licitud del tratamiento enumerados en el artículo 6 de dicho Reglamento [véanse, en este sentido, las sentencias de 22 de junio de 2021, Latvijas Republikas Saeima (Puntos por infracciones de tráfico), C-439/19, EU:C:2021:504, apartado 96, y de 7 de diciembre de 2023, SCHUFA Holding y otros (Scoring), C-634/21, EU:C:2023:957, apartado 67].

Respecto de los datos relativos a infracciones penales:

48 [...] ni el artículo 6, apartado 1, letra e), del RGPD ni el artículo 10 de dicho Reglamento prohíben de manera general y absoluta que una autoridad pública esté facultada, o incluso obligada, a comunicar datos personales a las personas que lo soliciten [véase, en ese sentido, la sentencia de 22 de junio de 2021, Latvijas Republikas Saeima (Puntos por infracciones de tráfico), C-439/19, EU:C:2021:504, apartado 103].

En consecuencia, el tratamiento de datos de naturaleza penal ha de estar amparado en una ley, ha de cumplir los principios del art. 5 y tener una base del art. 6, ambos del RGPD, su tratamiento está sujeto por el RGPD a restricciones adicionales (art. 10 RGPD), si bien no se trata de un derecho ilimitado, pudiéndose proceder a su comunicación, siempre que la normativa que autorice dicha comunicación establezca **garantías adecuadas** para los derechos y libertades de los interesados [véase, en ese sentido, apartado 49 de la STJUE C-740/22, citada, o la sentencia de 22 de junio de 2021, Latvijas Republikas Saeima (Puntos por infracciones de tráfico), C-439/19, apartado 104].

V

Los distintos reglamentos citados en la consulta contienen también una regulación que desarrolla la normativa legal hasta ahora citada, y que incluso aportan garantías para estos tratamientos de datos de naturaleza penal.

El Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, por el que se regula el Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia (SIRAJ), en el art. 6.3, añadido por Real Decreto 607/2025, de 8 de julio, y sobre cuyo proyecto se emitió informe por esta Agencia (Informe 61/2024), señala:

3. Mediante los medios electrónicos adecuados a tal fin, la persona encargada del Registro Central de Penados proporcionará a los órganos administrativos, Organismos Públicos y Entidades de Derecho Público vinculados o dependientes, la información que conste en dicho Registro

*que resulte necesaria para la tramitación de sus procedimientos administrativos, **siempre que se encuentren habilitados a tal efecto mediante una norma con rango de ley***

Y en su art. 16.c), modificado igualmente en 2025 (RD 607/2025) señala, en concordancia con lo establecido en la LO 8/201, que:

*c) Por la persona encargada de los Registros integrados en el Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia, siempre que no se trate de información reservada a Jueces y Tribunales, se informará igualmente de los datos contenidos en las inscripciones de los Registros Centrales de Penados, Registro de Delincuentes Sexuales y Trata de Seres Humanos, [...] a instancia de cualquier órgano de las Administraciones Públicas ante el que se tramite un **procedimiento en el que sea preceptivo este certificado para acceder a un derecho o adquirir una condición determinada con consentimiento de la persona interesada**, ya sea persona física, jurídica o entes sin personalidad, manifestado directamente o a través de su representante, **salvo que una norma con rango de ley lo exceptúe**. Dicha información se limitará únicamente a los datos relativos a la persona física, jurídica o ente sin personalidad interesado en el procedimiento*

Esto es, estas normas parten de la base de que existe bien una habilitación para ello con rango de ley, o un procedimiento dirigido a acceder a un derecho o adquirir una condición determinada, puesto en marcha por un interesado, y que este tiene un interés en que se certifique sobre su situación en el registro de penados o de delincuentes sexuales, para lo que se necesita su consentimiento. Por eso se exige bien una ley bien dicho consentimiento, lo que **constituye una garantía**, en el sentido expuesto, ya que, además, la finalidad de dicha certificación, en el caso del consentimiento del interesado- es demostrar la ausencia de datos negativos de una determinada persona en unos registros, cuando se inicia dicho procedimiento ante otra autoridad administrativa y se necesita que se aporte una certificación en tal sentido. Puede existir -como establece la norma-, sin embargo, una norma con rango de ley que, en el caso concreto, cuando exista, podrá no requerir dicho consentimiento para que el órgano encargado del otorgamiento, revisión o continuidad de la autorización o licencia consulte el correspondiente registro.

Del mismo modo, la Disposición adicional quinta de ese mismo real Decreto permite la utilización de la Plataforma de Intermediación de Datos de la Administración del Estado por parte de las Administraciones Públicas, **salvo oposición de la persona interesada**, para obtener la certificación negativa del Registro Central de Penados y del Registro Central de Delincuentes Sexuales y Trata de Seres Humanos, cuando la certificación de la ausencia de antecedentes penales o por delitos de naturaleza sexual o de trata de seres humanos deba aportarse en un procedimiento administrativo, constituya un

requisito para el acceso a un derecho o adquirir una condición determinada, así como para ejercer profesiones, actividades u oficios que conlleven un contacto directo y habitual con personas menores de edad. Esto es, por otra parte, lo mismo que establece el art. 28 de la ley 39/2015, como expresión un derecho del interesado a no aportar documentos al procedimiento administrativo cuando dichos documentos ya se encuentran en poder de la Administración. En caso de oposición le corresponde al interesado aportarlo.

Como ya se expuso en nuestro Informe 61/2024, ya citado:

En consecuencia, se informa favorablemente la redacción de la disposición adicional quinta de la norma objeto de informe, debiendo en todo caso interpretarse de la manera sostenida por esta Agencia en sus informes, esto es, que la solicitud de acceso al registro ha de venir precedida no sólo del consentimiento previo y expreso del interesado para la expedición de la certificación correspondiente en todo caso, sino de una necesidad derivada de la finalidad de que el interesado desea acceder a una profesión, oficio o actividades para las que se requiere contacto habitual con menores de edad (art. 57 LO 8/2021).

En definitiva, se requiere según este decreto el consentimiento, o la falta de oposición, del interesado a la obtención de dichos datos de los registros, cuando la *certificación de la ausencia de antecedentes penales o por delitos de naturaleza sexual o de trata de seres humanos deba aportarse en un procedimiento administrativo, constituya un requisito para el acceso a un derecho o adquirir una condición determinada, así como para ejercer profesiones, actividades u oficios que conlleven un contacto directo y habitual con personas menores de edad.*

VI

El Real Decreto 640/2014, de 25 de julio, por el que se regula el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios (REPS) señala como objetivo de esta norma facilitar la adecuada planificación de las necesidades de profesionales sanitarios del Estado y coordinar las políticas de recursos humanos en el ámbito del Sistema Nacional de Salud (art. 2), así como incorporar (art. 4) los datos de los profesionales sanitarios, entre ellos la suspensión o inhabilitación para el ejercicio profesional (art. 5, letra t), estando obligados a comunicar dichos datos al REPS los organismos, entidades y empresas a que se refiere el art. 6, en los términos del Anexo II de la norma, incluyendo los juzgados y tribunales, respecto a los datos necesarios que contengan las **sentencias de inhabilitación o suspensión** para el ejercicio profesional que devenguen firmes. Pero antes de comunicar dichos datos al REPS, las entidades comunicantes deberán haberlos registrado en sus propios registros (art. 7).

Esto es, la responsabilidad sobre la determinación de los datos necesarios a comunicar al REPS recae en las entidades del art. 6 (ver art. 6.2), y la competencia del REPS es hacer constar en él esos datos, de modo que cuando haya una modificación de dichos datos, son esas entidades las que habrán de comunicarla al REPS (art. 8).

Además, la Disposición adicional quinta de esta norma añade que:

*El órgano encargado del registro [REPS] podrá consultar los datos referentes a las sentencias **de inhabilitación o suspensión** para el ejercicio profesional contenidas en las inscripciones de los registros integrados en el Sistema de Registros Administrativos de Apoyo a la Administración de Justicia, salvo que se trate de información reservada a los órganos judiciales. Para ello, el órgano encargado del registro **solicitará** al órgano competente del Ministerio de Justicia los datos necesarios del profesional sanitario de que se trate, en cada caso.*

El Anexo I establece la definición y contenido de los datos de los profesionales sanitarios a que se refiere el artículo 5. Y el Anexo II los datos que ha proporcionar al REPS cada organismo.

VII

Por lo que hace al Real Decreto 1110/2015, de 11 de diciembre, por el que se regula el Registro Central de Delincuentes Sexuales (RCDS), su art. 3 configura el RCDS como un sistema de información de carácter no público y gratuito relativo a la identidad, perfil genético, penas y medidas de seguridad impuestas a aquellas personas condenadas en sentencia firme por cualquier delito contra la libertad sexual o por trata de seres humanos, y cuya finalidad es el establecimiento de un mecanismo de prevención que permita conocer si quienes pretenden el acceso y ejercicio de profesiones, oficios y actividades que impliquen el contacto habitual con personas menores de edad, carecen o no de condenas penales por los delitos citados.

Su art. 8 regula el acceso a la información que contiene, y el acceso directo a la información que contiene sólo se contempla (en redacción llevada a cabo por RD 407/2024) para los jueces y tribunales, para el Ministerio Fiscal y para la policía judicial, en tanto sea necesario para el ejercicio de las competencias previstas en el artículo 549.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con la prevención, persecución y seguimiento de las conductas inscritas en este Registro.

Su art. 9.2 permite que el propio RCDS *informe* directamente de los datos contenidos en él, a instancia de cualquier órgano de las Administraciones

Públicas o Colegio profesional ante el que se tramite un procedimiento para acceder a profesiones, oficios o actividades que impliquen un contacto habitual con personas menores de edad, así como para su ejercicio, siempre que haya **previo consentimiento expreso** de la persona interesada. Si se tratase de empresas o entidades, si existiere previo consentimiento expreso del interesado, estas podrán comprobar la inexistencia de antecedentes en el RCDS mediante la obtención de una certificación negativa del Registro. En ausencia de tal consentimiento, el *certificado se expedirá* sólo a instancia de la persona interesada.

Del mismo modo, los apartados 4 y 5 de dicho art. 9 recogen otros supuestos en que a instancia de determinadas instituciones (entidades públicas de protección de menores y autoridades judiciales o policiales extranjeras) pueden obtenerse datos de ese RCDS sin consentimiento del interesado.

VIII

Por último, el Real Decreto 581/2017, de 9 de junio, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, relativo al mecanismo de alerta en el caso de las profesiones sanitarias para con los demás estados miembros de la Unión Europea, igualmente citado por la consulta, establece en su art. 77, en lo que aquí interesa, que corresponde al REPS informar a las autoridades competentes de los demás Estados miembros y al coordinador nacional (MECD) acerca de los profesionales a los que los **órganos jurisdiccionales nacionales** hayan **restringido o prohibido** total o parcialmente, incluso con carácter temporal, **el ejercicio de las actividades profesionales**.

Parece referirse dicha redacción exclusivamente a los supuestos de **inhabilitación o suspensión establecida como pena específica** (principal o accesoria) en un proceso penal, pero no parece referirse a los casos en que por haber cometido un delito de los previstos en la LO 8/2021, esa sentencia condenatoria supone la pérdida de un requisito de habilidad para el ejercicio de la profesión cuando esta supone el tratamiento habitual con menores, pero no es una pena específica recogida en el Código Penal.

Esto es, este apartado parece requerir que la sentencia condene a inhabilitación o suspensión, pero no a aquellos casos en que la sentencia de condena suponga una pérdida de la habilidad para el ejercicio profesional por suprimir -incluso de manera sobrevenida- uno de los requisitos para ello, por establecerlo así la ley -no haber sido condenado por determinados delitos-, pero no sea una “pena” (como cabe entender que es el caso de las sentencias a que se refiere el art. 57 de la LO 8/2021).

Así, el Tribunal Supremo ha entendido reiteradamente (sentencias, entre otras, 295/2020, de 2 de marzo, 585/2020, de 28 de mayo, 632/2020, de 1 de junio, 1405/2020, de 27 de octubre, 1413/2020, de 28 de octubre, 1631/2020, de 30 de noviembre, 859/2021, de 16 de junio, o 1156/2021, de 22 de septiembre -esta última de donde proviene la cita a continuación-), que:

*[No] se ve negativamente afectado el art. 9.3 CE, que consagra el principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. No se vulnera el precepto pues, (...) dicho Registro y las medidas que en el R.D. se contemplan **no son disposiciones sancionadoras**, insistimos, sino medidas de protección de los menores frente a la lacra que representan los pederastas y depredadores sexuales, siendo ese interés del menor absolutamente prevalente, y así ha sido reconocido en la referida normativa.*

[...]

*la previsión contenida en el art. 13.5 de la Ley Orgánica de Protección del Menor, que lleva consigo la imposibilidad de ejercer cualquier profesión o cargo relacionado con menores, [...] **no comporta una nueva pena, sino una condición para el ejercicio profesional establecida en la ley, amparada en el art. 36 de la CE**, que prevé que la ley regulará el ejercicio de las profesiones tituladas. En este caso, la Ley 26/2015, de 28 de julio, de Modificación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia, añade un **nuevo requisito para el ejercicio de profesiones, actividades y cargos que impliquen un contacto habitual con menores** a fin de proteger el interés prevalente de estos menores, ofreciéndoles una protección que compete a los poderes públicos a tenor del art. 39 CE.*

IX

Sobre la base de la normativa expuesta, procederemos a responder a las consultas planteadas.

1. La primera de ellas es la siguiente:

1. Teniendo en cuenta la normativa en vigor, dado que la consulta se realiza sobre la totalidad de los antecedentes penales ¿puede el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios, realizar la consulta acerca de la existencia o no de antecedentes penales de dichos profesionales a los efectos de conocer si están inhabilitados o suspendidos para el

ejercicio profesional por sentencia judicial firme, sin contar con el consentimiento del interesado?

La respuesta, como adelanta el propio consultante, ha de ser negativa.

Un tratamiento de datos que consultase sobre *todos* los antecedentes penales, y no exclusivamente sobre aquellas condenas penales que conllevasen *inhabilitación o suspensión* para el ejercicio profesional sanitario (art. 4.10 Ley 44/2003) sería un tratamiento que infringiría el principio de minimización del art. 5.1.c) RGPD. El consentimiento del interesado no sería, en este caso, propiamente, base de licitud, por cuanto sería más que dudoso que en la relación con una Administración dicho consentimiento fuese verdaderamente libre (art. 4.11 RGPD y Considerando (42) RGPD).

El que exista, como razona el consultante, una “*imposibilidad técnica de formular una consulta a la Plataforma del Ministerio de Justicia sólo sobre antecedentes en los que exista inhabilitación o suspensión, ya que la plataforma consulta sobre la totalidad de los antecedentes penales del DNI del consultado, sin permitir usar en la consulta criterios que permitan acotar los resultados sólo a las condenas por inhabilitación o suspensión; en consecuencia, la respuesta a la consulta se refiere a la totalidad de los antecedentes penales*” no es, ciertamente, una razón que permita llevar a cabo un tratamiento de datos contrario la ley o al RGPD. La solución es, precisamente, permitir dicha consulta de manera exclusivamente para las finalidades previstas en la ley, esto es, para las condenas de inhabilitación o suspensión para el ejercicio profesional.

2. La respuesta a la segunda pregunta:

2. Teniendo en cuenta la normativa en vigor, ¿puede el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios realizar la consulta acerca de la existencia o no de antecedentes sexuales de dichos profesionales a los efectos de conocer si existe alguna limitación para trabajar con menores sin contar con el consentimiento del interesado?

Ha de ser igualmente negativa.

Como ya hemos expuesto, las normas parten de la base de que existe bien una habilitación para ello con rango de ley, o un procedimiento dirigido a acceder a un derecho o adquirir una condición determinada, puesto en marcha por un interesado, y que este tiene un interés en que se certifique sobre su situación en el registro de penados o de delincuentes sexuales, para lo que se necesita su consentimiento. Por eso se exige bien una ley bien dicho consentimiento, lo que constituye una garantía del tratamiento.

3. La tercera pregunta:

3. En caso negativo, ¿podría considerarse que un cambio legislativo, dictando una norma con rango de ley, que permita la consulta de antecedentes penales y/o sexuales de los profesionales sanitarios sin contar con su consentimiento a los efectos de comprobar que el acceso y el ejercicio profesional cumple con las resoluciones judiciales y también con la carencia de antecedentes sexuales, sin que ello contradiga la LOPDGDD y el RGPD?

Una modificación legislativa que cumpliera con los criterios legales y jurisprudenciales para los tratamientos de datos sería posible, ciertamente, pero para ello será necesario que la configuración del tratamiento establezca cuál es la finalidad de este, la competencia del responsable del tratamiento y la necesidad específica de los datos o categorías de datos a tratar. Hay que advertir que, tal y como está formulada, la consulta de *todos* los antecedentes penales seguiría siendo contrario al RGPD, por cuanto no se advierte, a los efectos de esta consulta, la necesidad de consultar *todos* los antecedentes penales, si lo que requiere la norma es únicamente verificar aquellos antecedentes que determinen la inhabilitación o suspensión para el ejercicio de dichas profesiones sanitarias.

Igualmente cabe señalar que la actual redacción de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio parece oponerse en la actualidad a tal posibilidad de consulta, puesto que tal ley parece estar construida sobre la necesidad de que quien quiere acceder a una profesión en la que exista trato habitual con menores *aport[e] una certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales* (art. 57.1); y la Disposición adicional sexta de esta norma prevé la comprobación automatizada de los antecedentes regulados en los artículos 57 a 60, pero no excluye la necesidad de que exista un consentimiento para ello de quien solicita la certificación, como por otra parte se confirma con la redacción del RD 1110/2015, modificado por RD 407/2024.

4. Cuarta pregunta:

4. ¿Podría el Ministerio de Sanidad delegar la consulta en SIRAJ acerca de la existencia o no de antecedentes penales de dichos profesionales a los efectos de conocer si están inhabilitados o suspendidos para el ejercicio profesional por sentencia judicial firme, sin contar con el consentimiento del interesado, en otro departamento y órgano de la Administración General del Estado, y en tal caso en cuál y mediante qué instrumento jurídico?

No se acaba de comprender muy bien, por falta de exposición en el texto de la consulta, la finalidad u objetivo de la misma, por lo que en primer lugar cabría decir que si la finalidad de ello fuese evitar los requisitos que las leyes y los reglamentos expuestos establecen, nos podríamos encontrar ante una

causa de anulabilidad de los actos administrativos, por una posible desviación de poder, por ejercitar potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico (art. 48.1 ley 39/2015, y 70.2 de la ley 29/1988, LJCA). En términos civiles podría hablarse, si ese fuera el caso, de un fraude de ley (art. 6.4 Código civil)

De todos modos, esta cuestión, que resulta más propia de derecho organizativo que de protección de datos personales no correspondería su respuesta a la AEPD. Lo que sí puede mencionarse es que el art. 8 de la ley 40/2015 establece que *[l]a competencia es irrenunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación, cuando se efectúen en los términos previstos en ésta u otras leyes*. Desde la perspectiva de la normativa de protección de datos, la elección por el responsable del tratamiento de un encargado del tratamiento requerirá el cumplimiento por este de lo establecido en el art. 28 RGPD, y además le corresponde al responsable del tratamiento emitir las instrucciones para dicho tratamiento que haya de seguir el encargado (art. 29 RGPD).